



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**INFORME SECRETARIAL**

Barranquilla, 19/10/2020.

<b>Radicado</b>	08001-33-33-014-2020-00175-00
<b>Medio de control o Acción</b>	Ejecutivo
<b>Demandante</b>	Belisario Fábregas Pedroza
<b>Demandado</b>	E.S.E. Hospital Local de Santo Tomás
<b>Juez</b>	Guillermo Osorio Afanador

<b>INFORME</b>
Señor Juez, paso a su despacho el expediente de la referencia asignado a este juzgado previa formalidad de reparto.

<b>PASA AL DESPACHO</b>
A fin que se pronuncie acerca de librar o no el mandamiento de pago solicitado.

<b>CONSTANCIA</b>
Expediente digitalizado con 15 folios

**ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS**  
**SECRETARIO**

<b>Último Folio Digitalizado y número de cuaderno</b>	<b>Firma de Revisado</b>



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, diecinueve (19) de octubre dos mil veinte (2020).

<b>Radicado</b>	08001-33-33-014-2020-00175-00
<b>Medio de control o Acción</b>	Ejecutivo
<b>Demandante</b>	Belisario Fábregas Pedroza
<b>Demandado</b>	E.S.E. Hospital Local de Santo Tomás
<b>Juez</b>	Guillermo Osorio Afanador

**CONSIDERACIONES**

El señor **Belisario Fábregas Pedroza**, actuando a través de apoderada especial, presentó solicitud de cumplimiento de sentencia ante el Juzgado Quince Administrativo Escritural del Circuito de Barranquilla, tendiente a obtener de esta jurisdicción que se libre mandamiento de pago en aras de cobro forzoso de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión (Hoy Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla) y el H. Tribunal Administrativo del Atlántico.

El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, resolvió declarar la falta de competencia por factor funcional, y remitió a la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos, para que fuera sometido a la formalidad del reparto, en consideración a que el mencionado Juzgado pertenece al sistema escritural y por ende sólo conocerán de los procesos iniciados y tramitados bajo el sistema escritural, comoquiera que de conformidad con el artículo 304 del CPACA, su objetivo es el de llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Así las cosas, correspondió a este Despacho por reparto el conocimiento de la presente demanda ejecutiva.

Entendiéndose el proceso ejecutivo como el medio o instrumento judicial para obtener el cumplimiento forzoso de obligaciones de dar, hacer y no hacer, a favor de un acreedor y en contra de un deudor que no han sido cumplidas, basadas en un título ejecutivo simple o complejo, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible ante la justicia.

La doctrina define el proceso ejecutivo como seguidamente se cita a continuación:

*"El proceso ejecutivo no tiene por objeto como el de conocimiento, declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya existe, reconocido en una prueba preconstituida. Carnelutti dice que los procesos ejecutivos tienen como fin "satisfacer una pretensión" y Chiovenda advierte que su finalidad es "lograr la actuación práctica de la ley".<sup>1</sup>*

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado, en reiterados pronunciamientos, entiende el proceso ejecutivo como a continuación se cita textualmente:

*"El proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho subjetivo del ejecutante que consiste en la facultad de reclamar el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en el título ejecutivo y cuyo titular es el ejecutante acreedor; tiene por finalidad asegurarle a*

<sup>1</sup> MONROY CABRA, Marco Gerardo Procesos Ejecutivos, declarativos y cautelares Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N° 2. Pág. 50, 1984.



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

*éste la satisfacción de su acreencia mediante la utilización de medios coercitivos legítimos y legales (art. 488 C. P. C.). A ello se debe que la obligación por cuyo cumplimiento se reclama o se pretender ejecutar ante el poder jurisdiccional del Estado debe tener esas tres características – obligación clara, expresa y exigible - las cuales se deben revelar o contener o en el documento si el título es simple o en el conjunto de documentos si el título es complejo.<sup>2</sup>*

Descendiendo a estudiar la demanda ejecutiva formulada por el señor Belisario Fábregas Pedroza, actuando a través de apoderada especial, pretende que el despacho libre mandamiento de pago a su favor, por el valor de la suma líquida de dinero equivalente a aquellas que comprenda el monto total de las condenas impuestas en la sentencia cuyo cumplimiento se solicita, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión Circuito Judicial de Barranquilla (Hoy Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla) y que fue confirmada por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico.

Advirtiéndolo el despacho, que la actora presenta la demanda ejecutiva solicitando se libre mandamiento de pago el día 19 de septiembre de 2019, época de vigencia de Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.), pretendiendo el cumplimiento de la condena impuesta en sentencias proferidas en el procedimiento del derogado Decreto 01 de 1984 (C.C.A.), es menester determinar si le asiste a este juzgado conocer del caso objeto del proceso.

Sobre el particular la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,<sup>3</sup> en auto dictado por Importancia Jurídica, ha sentado precedente respecto de determinar la competencia en demandas ejecutivas como las que ocupa nuestra atención, providencia en la cual se contemplan, entre otros, los siguientes eventos:

“(…)

- a) *Puede ocurrir que el despacho que profirió la sentencia de condena haya desaparecido para el momento en que regresa el expediente del trámite de segunda instancia, caso en el cual la competencia la asumirá el que corresponda de acuerdo con la redistribución o reasignación que se haya dispuesto de los asuntos que este conocía, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.*
- b) *Si el proceso se encuentra archivado y ocurre la desaparición del despacho que profirió la condena, la competencia para conocer del proceso ejecutivo le corresponderá a aquel que se determine de acuerdo con el reparto que efectúe la oficina encargada de ello, en el respectivo Circuito Judicial o Distrito Judicial, según el caso.*
- c) *Ahora bien, en el caso de los procesos fallados en vigencia del régimen anterior, esto es, en vigencia del Decreto 01 de 1984, pero cuya ejecución se inició bajo las previsiones del CPACA, el procedimiento a seguir es el regulado en este último y en el CGP, puesto que pese a que la ejecución provenga del proceso declarativo que rigió en vigencia del Decreto 01 de 1984, el proceso de ejecución de la sentencia es un nuevo trámite. (subrayas por el despacho).*  
“(…)”

Teniendo en cuenta las premisas planteadas en el auto arriba transcrito, y estando de acuerdo con las consideraciones esbozadas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, esta Agencia Judicial se estima competente para conocer de la solicitud de mandamiento de pago formulada por el accionante, por encontrarse cumplidos

<sup>2</sup> H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de fecha 2 de octubre de 2003, C.P.: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

<sup>3</sup> Sección Segunda, Providencia de 25 de julio de 2016, C.P.: William Hernández Gómez,



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

los presupuestos contemplados en la tercera hipótesis, a que se refiere el citado alto tribunal, por lo cual avocará el conocimiento del presente proceso proveniente del Juzgado Quince Administrativo del Circuito.

Sin más preámbulos, el despacho procede a estudiar la demanda ejecutiva en aras de proveer lo que en derecho corresponda.

El artículo 422 del Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 299 del CPACA, establece las condiciones *formales* y de *fondo* que debe reunir un documento para que de él se pueda predicar la existencia de título ejecutivo. Las condiciones formales buscan que los documentos que integran el título conformen unidad jurídica, que sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme. A su vez, las condiciones de fondo, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.<sup>4</sup>

A su turno el numeral 1º del artículo 297 del CPACA, considera título ejecutivo a las “...sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.”

Quiere decir lo anterior que, para que una obligación pueda demandarse ejecutivamente debe constar en un documento que provenga del deudor y que además, sea expresa, clara y exigible. Al respecto el Consejo de Estado ha sostenido:

“ .....

1. Que la **obligación sea expresa**: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente.
2. Que **sea clara**: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).
3. Que **sea exigible**: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.
4. Que la obligación **provenga del deudor o de su causante**: El título ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor.
5. Que el documento **constituya plena prueba contra el deudor**: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, **la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho**. Por consiguiente, para que el

---

<sup>4</sup>Consejo de Estado – Sección Tercera, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado al número 26.726. Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez.



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso”.<sup>5</sup>

Para que pueda ser viable la demanda ejecutiva, se necesita que los documentos que se pretendan hacer valer, contengan los requisitos establecidos en las normas anteriores.

Para demostrar las obligaciones incumplidas cuya ejecución se demanda, el ejecutante presentó entre otros los siguientes documentos:

- Copia de la solicitud de pago de sentencia de fecha 18 de agosto de 2018, signada por la apoderada judicial de la parte ejecutante, y dirigida a la E.S.E Hospital Local de Santo Tomas. (folios 4-6)
- Copia de la liquidación de la sentencia judicial del proceso 2011-00204 signada por el señor David Alberto Coronado Orozco, Contador Auxiliar de la Justicia. Anexos: Tarjeta profesional y Cédula de ciudadanía, carné auxiliar de la justicia (folios 7-14)

El título del cual pretende el demandante su solución de pago por vía ejecutiva se encuentra según su dicho contenido en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, es del caso señalar que la parte ejecutante no aporta las mencionadas providencias, ni la respectiva constancia de ejecutoria.

Teniendo en cuenta que en lo que tiene que ver con procesos ejecutivos tendientes al cobro forzoso de obligaciones de dar, hacer y no hacer surgidas con ocasión a una condena ordenada por la jurisdicción contenciosa administrativa a través de un proceso ordinario, es requisito sine qua non que el título ejecutivo (sentencia ordinaria) sea aportada en debida forma por quien pretenda su cobro a través del proceso ejecutivo, como el caso sub examine.

El numeral primero del artículo 297 del C.P.A.C.A señala que constituyen título ejecutivo las **sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo** mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Para determinar el término de ejecutoria el legislador previó como requisito el establecido en el numeral segundo del Artículo 114 del C.G.P señala:

“(…) 2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo **requerirán constancia de su ejecutoria.**

Por lo antes anotado y al revisar exhaustivamente la foliatura del expediente, se observa que no se aporta copia autenticada de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión del Circuito de Barranquilla ( hoy Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla) y el H. Tribunal Administrativo del Atlántico, ni tampoco se arrima la constancia de su ejecutoria.

---

<sup>5</sup>Sentencia del 22 de junio de 2001, Consejo de Estado, C.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 44001 23 31 000 1996 0686 01 (13436), Demandante: Eduardo Uribe Duarte, Demandado: Departamento de la Guajira.





**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Así las cosas, esta Agencia Judicial considera en el caso sub-examine, para poder librar el mandamiento ejecutivo, se deben aportar **las providencias judiciales con la constancia de ejecutoria** (debidamente autenticada) que se pretende tener como título ejecutivo, no es posible omitir este requisito, ya que éste es el documento idóneo, que permite establecer con certeza su firmeza, además, la firma del Secretario del Juzgado, al expedir la constancia, da fe que la actuación judicial ha logrado su ejecutoria.

Por tanto, se evidencia en el caso que nos ocupa, que la demanda ejecutiva no cumple con los requisitos formales que permitan iniciar su respectivo trámite procesal, como es aportar de manera completa y conjunta la sentencia debidamente autenticada junto con la constancia de su ejecutoria. En consecuencia, esta agencia judicial se abstendrá de librar el mandamiento de pago solicitado por la parte actora.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Catorce Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla.

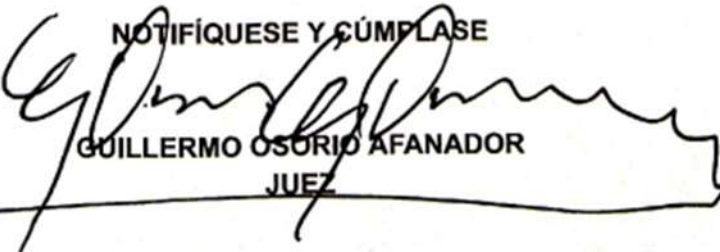
**RESUELVE:**

**PRIMERO: Avocar** el conocimiento del presente proceso de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ABSTENERSE** de librar mandamiento de pago en favor del señor Belisario Fábregas Pedraza y en contra de la E.S.E. Hospital Local de Santo Tomas, por las razones expuestas en precedencia.

**TERCERO:** Ejecutoriado este proveído, devuélvase la demanda y los anexos sin necesidad de desglose al ejecutante, dejando copia completa de la misma y sus anexos, así como de las actuaciones para el archivo digital del Juzgado.

**CUARTO: Notificar** el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
  
GUILLERMO OSORIO AFANADOR  
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRONICO  
N° **118** DE HOY **(20/10/2020)** A LAS 8:00 Horas



Alberto Oyaga Larios  
SECRETARIO

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO  
201 DEL CPACA